

ESTADO DE DERECHO E INDEPENDENCIA JUDICIAL EN EL SALVADOR.

Introducción.

El análisis de este tema pasa por establecer mínimos de lo que se comprende por Derecho y Estado, de ahí que para nuestro caso, Derecho sea una herramienta de control social, claro está, que en este caso la norma debe ser elaborada bajo ciertos parámetros¹ para alcanzar la eficacia en el control de la conducta humana como fin perseguido, ya que para lograr aquella es necesario que haya un convencimiento que la norma es feliz con el contexto del colectivo en el cual se aplicará y que busca la convivencia en armonía de los individuos. Por tanto en las siguientes líneas abordaré la problemática existente en cuanto al Estado de Derecho y la Independencia judicial

Para eso iniciaré definiendo lo que entendemos por Estado, desde el punto de vista de algunos autores, para continuar con la conceptualización de Estado de Derecho, lo que me permitirá profundizar en la separación de poderes, según la teoría de pesos y contrapesos, base del Estado de Derecho. Para seguir con independencia judicial como elemento básico para la administración de justicia en el ordenamiento jurídico salvadoreño y poder concluir con algunas conclusiones sobre el tema que me ocupa.

Estado de Derecho e Independencia Judicial.

Iniciamos preguntándonos ¿A qué se le llama Estado?. Según Ramón Cotarelo 1996:15, el Estado es la ***“... forma de organización política, esto es, como un territorio comprendido dentro de unas fronteras ciertas, en el que habita un pueblo concebido como conjunto de sujetos de derechos y deberes, sometido a un ordenamiento jurídico-político”*** esta forma de organización si bien a sufrido muchos cambios a través de la historia a llegado a consolidarse como la institución humana con mayor jerarquía, pues posee un poder soberano que le es entregado para procurar la convivencia pacífica del colectivo social al que pertenece.

En la dirección electrónica www.wikipedia.org se conceptualiza al Estado así: ***“...en derecho internacional y relaciones internacionales, una institución política que posee soberanía, esto es, que no está sujeta a ninguna otra subdivisión política mayor”***. En esta apreciación ya podemos observar que es considerada como, una institución política con una característica propia, soberanía². ¿Pero cómo entendemos

¹ Rafael de Asís, *una aproximación a los modelos de estado de derecho*. Dykinson, Madrid 1999. Hay dos construcciones una sistemática y otra no sistemática, La idea de sistema, aplicada a la relación entre Poder y Derecho, supone establecer unos límites al ejercicio normativo del Poder (al menos, la prohibición de crear normas que contradigan esas exigencias de unidad y coherencia); mientras que las no sistemáticas, aplicadas a la relación entre Poder y Derecho, no añaden en principio estas exigencias, es decir, plantean esa conexión sin añadidos. Integran la idea de límites al Poder en un sentido mínimo, es decir, haciendo alusión a existencia de mandatos relacionados con el Poder y que necesariamente, por el simple hecho de ser emitidas, delimitan su actuación.

² Francisco Porrúa Pérez.1977:351 manifiesta que la soberanía es la manera de ser institucional del Estado. La autoridad está en la comunidad y redonda en la comunidad, correspondiendo en cuanto a su ejercicio a los individuos y en la medida que éstos proveen al bien común. Por tanto, la soberanía es una característica del Estado, inherente a su ser mismo. El Estado en este sentido, no tiene un derecho de soberanía, sino que es soberano.

el término soberanía?. En términos sencillos es el poder supremo y absoluto del cual está facultado un Estado determinado para ejercer el poder dentro y fuera de su territorio.

Para el caso nuestro, la Constitución de la República en su art. 83, lo establece de la siguiente forma ***“El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución”***. Y el art. 86 del mismo texto ***“El poder público emana del pueblo...”*** Por tanto el soberano es el pueblo mismo, quien se despoja de ese poder para dotar del mismo a ese ente ficticio pero fuerte llamado Estado, para que se creen y ejecuten las políticas correspondientes a fin de lograr el bien común para el pueblo que lo habita en el territorio determinado como lo expone Ramón Coratelo. Ahora bien, Estado es: Un colectivo social jurídicamente organizado, arraigado sobre un territorio, ejerciendo soberanía, cuyo orden normativo jurídico busca la regulación de la conducta humana que conduzca a la convivencia en armonía para garantizar el bien común de todos y todas.

El concepto de Estado de Derecho, en la dirección electrónica www.wikipedia.org, es el siguiente ***“... aquel Estado dentro de cuyo ordenamiento jurídico existe una separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Dentro del ordenamiento jurídico del Estado de Derecho también tiene que existir una declaración y garantía de derechos y libertades fundamentales”***.

Partiendo de esta definición y sus presupuestos mínimos: Separación de poderes y una declaración y garantía de derechos y libertades fundamentales (libertad de expresión, asociación, igualdad política, respeto a la vida, etc.) particularmente no dudaría en manifestar que en nuestro país vivimos bajo un Estado de Derecho, pues se cumplen formalmente estos presupuestos, basta con observar la Constitución de la República en sus artículos: 1, 6, 7, 9, 11, 86, 87. para poder determinarlo como tal.

Elías Díaz, 1998: 44 establece que un Estado de Derecho deben encontrarse las siguientes características para ser llamado como tal ***“imperio de la ley, división de poderes, legalidad de la administración, derechos y libertades individuales”***, con éstos presupuestos satisfechos el Dr. Díaz afirma que una sociedad podría vivir bajo un régimen respetuoso de la ley; que a su vez permitiría el funcionamiento de las instituciones apegadas al mandato legal que les dio origen, con una generación de pesos y contrapesos en los distintos órganos del Estado, lo que permita un control mutuo, mas no injerencias en sus actividades porque en eso deben ser independientes y por último habría pleno uso y goce de los derechos y libertades fundamentales.

Con éstos conceptos me atrevo a decir que Estado de Derecho es aquel en el cual existe una separación de poderes con total independencia que permita la teoría de pesos y contrapesos en la administración pública para que se garantice a toda la población que conforma el colectivo social, el pleno respeto y el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, individuales y colectivas. Con esto quiero confirmar que a mi criterio no es suficiente el hecho de regular en el ordenamiento jurídico-legal la existencia de las libertades fundamentales y derechos de los ciudadanos; si no además garantizar su ejercicio.

Por otro lado la independencia judicial, constituye una garantía para el efectivo funcionamiento del Órgano Judicial, pero además, asegura el cumplimiento y protección de otros derechos fundamentales. Y como garantía procesal, permite consolidar un Estado Democrático de Derecho, es por ello que ningún juez o magistrado, debe estar sujeto a presiones y/o influencias, sean éstas directas o indirectas, internas o externas. Pues como bien sabemos el Estado de Derecho se fundamenta entre otras características por la separación de poderes enunciada por Montesquieu, y contenida en nuestra Constitución³ en el Art. 86 Inc. 1º. Por tanto ningún otro Órgano del Estado debe ejercer presión alguna o tratar de influir en las decisiones del órgano judicial, ya que atentaría contra su independencia, y estaría en riesgo la seguridad jurídica, haciendo menos confiable el derecho de acceso a la justicia. Además el artículo 172 inc. 3ro de la misma norma establece que el ejercicio de la función jurisdiccional será desarrollada de forma independiente y tendrá como límite solamente a la misma Constitución y las leyes. Ya que si pretendemos que haya respeto a éstas y que los individuos nos sometamos a la justicia debemos evitar cualquier intromisión sea económico o político que suponga dudas sobre la independencia judicial.

Al respecto la Jueza Sandra Day O'Connor manifiesta: “La independencia judicial no es un fin, si no el medio hacia un fin. Es la médula del imperio de la ley que da a la ciudadanía la confianza en que las leyes se aplicarán justa e igualmente. En ninguna otra parte se evidencia más patentemente este interés que en la protección judicial de los derechos humanos. La independencia judicial también hace posible que los jueces adopten decisiones que son contrarias a los intereses de otras ramas del gobierno. Los presidentes, ministros, legisladores a veces se apresuran a encontrar soluciones convenientes a las exigencias del momento. Una judicatura independiente está en condiciones de reflexionar sobre el efecto de esas soluciones sobre los derechos y la libertad, y debe actuar para asegurar que esos valores no se socaven. La independencia es la fuente de donde emana el coraje necesario en el servicio a esta función del imperio de la ley”⁴

En nuestro país, el Presidente de la República y algunos otros funcionarios han ejercido presión al Órgano Judicial en determinados momentos para que aplique una ley en concreto, tal caso ocurrió con la “Ley Antimaras” manifestando “que el pueblo les pasará la factura si no aplican la ley contra las maras”, en estos casos, se está atentando contra la independencia judicial, pues dichas expresiones pretenden influir en la voluntad, autonomía y poder de decisión de los señores Jueces de la República, y desde todo punto de vista, tales cuestionamientos resultan ser irrespetuosos para un funcionario o autoridad pública, por tanto si se atenta contra su independencia, se atenta contra la Constitución.

Algunos jueces como era de esperarse haciendo uso de su independencia judicial no la aplicaron, lo que les hizo acreedores de serias arremetidas por parte del ejecutivo al ser acusados de apoyar la delincuencia con la no aplicación de una normativa legalmente aprobada. Aunado a esto, el limitado papel desempeñado por la

³ Art. 86 Cn “El poder público emana del pueblo. Los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establece esta Constitución y las leyes”.

⁴ LA IMPORTANCIA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL , Sandra Day O'Connor juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Departamento de Estado de Estados Unidos, Foro Judicial. Marzo de 2004

Corte Suprema de Justicia al resolver los recursos de inconstitucionalidad provenientes de distintos sectores de la sociedad cuando se había concluido el plazo para el cual la mencionada ley había sido aprobada, es decir, cuando la declaratoria de inconstitucionalidad ya no tenía mayor sentido. Dejando en total evidencia que la independencia judicial estaba siendo vulnerada, y aún más al no pronunciarse contra las presiones que se estaban teniendo de parte del ejecutivo.

Aunque el caso que he tomado, para muchos ya no forma parte de la agenda de discusión, quise retomarlo para evidenciar lo peligroso que es para la institucionalidad del país la injerencia en la administración de justicia de los órganos a quienes no les compete esa función, principalmente el ejecutivo, ya que la función judicial es de suma importancia en la consolidación de un Estado de Derecho, pues desde ahí se debe controlar que el imperio de la ley sea la herramienta para la aplicación de la justicia y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Si bien es cierto contamos con la normativa legal que nos permita seguir caminando en el camino correcto para consolidar un Estado Constitucional de Derecho, aún nos falta mucho y debemos seguir trabajando para alcanzarlo plenamente, donde se respeten los presupuestos mínimos enunciados por el Dr. Elías Díaz y la administración de justicia esté a cargo de funcionarios con total independencia de tal suerte que su única barrera de control sea la Constitución de la República y las leyes.

Conclusiones

El hecho que la elección de funcionarios públicos tales como: Fiscal y Procurador General de la República, el presidente de la Corte de Cuentas, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; sean electos por la Asamblea Legislativa les quita poder de decisión en determinados momentos, ya que desde su elección representan a un sector político determinado, que es quien los ha apoyado en las votaciones para su elección, y por tanto en el ejercicio de sus funciones actúan para proteger a ese sector, de ahí que no se encuentre explicación como la honorable Corte Suprema de Justicia no resuelva en tiempo los recursos de inconstitucionalidad presentados en el caso de la ley anteriormente mencionada y la falta de respuesta ante eminente violación al Estado de Derecho e independencia judicial.

Cuando el poder económico no defina el poder político, y este no elija secundariamente a funcionarios como Fiscal General, Presidente de la Corte de Cuentas, Magistrados y Presidente de la Corte Suprema de Justicia, etc. y los electos no tengan ataduras de ninguna clase entonces y sólo entonces podremos hablar de independencia judicial y separación de poderes con carácter de control mutuo, que permita el balance de pesos y contrapesos.

Por tanto en nuestro país hay una separación de poderes frágil que no permite la independencia para generar pesos y contrapesos, y de igual forma no hay garantía que se respeten las libertades fundamentales desarrolladas al inicio, pues el Estado no genera las condiciones mínimas necesarias para crearlo así, y las instituciones no funcionan cumpliendo el mandato para el cual han sido creadas, - sea por falta de presupuesto, de personal idóneo, falta de políticas bien definidas, por clientelismo político, etc-. Nos hemos conformado con

un Estado de Derecho meramente formal, contemplado en las leyes las cuales son letra muerta en papel mojado.

La administración de justicia es una institución muy criticada por la resolución de litigios llenos de mucha incertidumbre, se debe mejorar mucho y tomar el papel de administradores de justicia con la responsabilidad que el pueblo exige, luchando porque se respete la independencia judicial ante posibles injerencias, embestidas u opiniones que sobre ella hagan otros funcionarios a quienes no les compete dicha función, es decir, se debe tomar un papel más protagónico por parte de los funcionarios judiciales para consolidar un Estado Constitucional de Derecho en el cual todas y todos los salvadoreños, confiemos en la administración de justicia.

Bibliografía

- Apuntes del seminario monográfico “Estado de Derecho y Derechos Fundamentales” impartido por el Dr. Rafael Asís, Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid.
- Constitución de la República de El Salvador.
- Elías Díaz, Estado de Derecho y Sociedad Democrática, Grupo Santillana ediciones, 1998, Madrid, España.
- Elías Díaz y Ruíz Miguel Alfonso, Filosofía Política II, Teoría del Estado, Editorial Trotta S.A., Madrid España, 1996.
- Sandra Day O'Connor , Jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, "La Importancia de la Independencia Judicial" Departamento de Estado de Estados Unidos. Foro Judicial, marzo de 2004,